**INFORME SOBRE LA DISCRIMINACIÓN, LA SEGREGACIÓN Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA**

CUESTIONARIO

**Antecedentes y objetivo del informe**

El informe temático del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Sr. Balakrishnan Rajagopal, a la Asamblea General se centrará en la cuestión de la discriminación en relación con el derecho a una vivienda adecuada, incluyendo el impacto de la segregación socio-espacial en el disfrute de los derechos humanos en entornos urbanos o rurales-urbanos.

La segregación socio-espacial y residencial puede entenderse como la separación impuesta o preferida de grupos de personas en un territorio delimitado por motivos de raza, casta, etnia, lengua, religión o nivel de ingresos. La segregación socio-espacial, incluyendo residencial, puede tener diferentes formas según el contexto territorial, cultural o histórico y suele caracterizarse por formas de exclusión económica y social, desigualdad y disparidades socio-espaciales en el acceso a la infraestructura, los servicios y las oportunidades de vida/desarrollo.

Se entiende por discriminación toda distinción formal o sustantiva, exclusión, restricción, preferencia u otro trato diferenciado que se base directamente o indirectamente en los motivos prohibidos de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, opinión política o de otra índole, posición económica, nacimiento u otra condición -incluida la discapacidad, la edad, la nacionalidad, el estado civil y la situación familiar, la orientación sexual y la identidad de género, el estado de salud, el lugar de residencia y la situación económica y social- que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos.[[1]](#footnote-1)

Los principales objetivos del informe serán identificar las formas contemporáneas e históricas de discriminación y segregación que afectan al derecho a una vivienda adecuada, poner en relieve buenas prácticas en la prevención de la discriminación y segregación en la vivienda y proporcionar orientación a los Estados sobre cómo pueden cumplir sus obligaciones en derechos humanos con respecto a estos temas.

Para elaborar su informe, el Sr. Rajagopal solicita contribuciones de los Estados, los gobiernos locales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los organismos de la ONU y otros actores interesados.

El cuestionario es detallado para permitir una recopilación exhaustiva de información que cubra todos aspectos del derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, se agradece que se responda únicamente a las preguntas sobre las que la organización, institución o entidad que responda tenga información o conocimiento especializado.

**INFORMACIÓN BÁSICA**

1. Nombre de la persona, organización, institución, organismo o Estado:

ONU-Habitat Bolivia

2. Tipo de entidad\*

Gobierno nacional o ministerio/agencia del gobierno federal

Organización intergubernamental o agencia de la ONU

Gobierno local o regional, organismo, representante o alcalde

Asociación, sindicato de inquilinos o cooperativa de viviendas

Red de ONG, organización paraguas

ONG de base comunitaria

Academia

Fundación

Organización nacional de derechos humanos, defensor del pueblo

Inmobiliaria, planificación urbana o construcción

Inversor inmobiliario o fondo de inversión

Sindicato

Otros:

3. Ciudad/Pueblo: La Paz

4. Estado/Provincia: Murillo

5. País (indique su región o "internacional" si el trabajo de su organización abarca varios países);

Bolivia

6. Correo electrónico de contacto (será confidencial) en caso de que tengamos preguntas:

**DISCRIMINACIÓN EN LA VIVIENDA**

7. ¿Qué formas específicas de discriminación legal o de facto y/o qué obstáculos afrontan los siguientes grupos en su país en relación al disfrute en condiciones de igualdad al derecho a una vivienda adecuada? (por favor proporcionar evidencias con ejemplos, estudios, informes e información estadística pertinente):

- Grupos/minorías raciales, de casta, étnicas, religiosas o de otro tipo

- Personas Afrodescendientes o Roma

- Migrantes, extranjeros, refugiados, desplazados internos

- Mujeres, niños o personas mayores

- Pueblos indígenas

- Personas con discapacidades

- Personas LGBTI

- Personas con bajos ingresos, incluidas las que viven en la pobreza

- Residentes de asentamientos informales; personas sin hogar

- Otros grupos sociales, por favor especificar

Las mujeres son afectadas por la pobreza de manera diferencial, las mujeres sufren más el efecto que las expulsa a las afueras de la ciudad y hacia los suburbios y barrios marginales que carecen de infraestructura y servicios.

Uno de los mayores problemas en relación a la vivienda en Bolivia es el hacinamiento, tanto en el área urbana como rural. Esta condición repercute en vulneraciones a sus derechos; una de las consecuencias son las violaciones a las que principalmente las niñas son expuestas. Asimismo, la salud de los niños está expuesta si las condiciones de habitabilidad de la vivienda son precarias, el acceso a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento adecuado son fundamentales para asegurar su salud, como las infecciones diarreicas que afectan al 14% de niños menores a 5 años (INE, 2018), las causas son el agua contaminada y el saneamiento inadecuado.

Actualmente, Bolivia atraviesa el denominado bono demográfico, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) esta situación será favorable hasta el año 2030. La Ley de la Juventud promulgada el 5 de febrero de 2013, tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas a su favor. Como consecuencia, el Estado diseñará políticas de acceso a la vivienda y vivienda social para las y los jóvenes de menores ingresos económicos, grupos vulnerables, matrimonios jóvenes, uniones libres o de hecho, padres y madres solteras. Asimismo el Art. 35 se refiere al diseño de las ETA’s y el nivel central de políticas de protección y promoción para al acceso a la tierra de jóvenes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Este marco jurídico está enfocado a la etapa de la juventud comprendida entre los 16 y 28 años.

El 1 de mayo de 2013 se promulga la Ley General de las personas adultas mayores que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Se consideran adultos mayores a las personas que están por encima de los 60 años. El Art. 5 menciona el derecho a una vejez digna, y en el inciso d) el acceso a la vivienda social. Los adultos mayores bolivianos pasarán de representar el 8,1% en el 2012 a 9,5% para el 2020 y a 11,5% en el año 2030 (INE 2012). Esta tendencia refleja el inicio del proceso de envejecimiento de la población de Bolivia. La esperanza de vida promedio llega a 72,5 años, 69,1 años para hombres y 75,9 años para las mujeres.

La ciudad y la vivienda deben ser adecuadas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en Bolivia de 10.059.856 habitantes registrados en el Censo 2012, 342.929 personas declararon tener alguna dificultad permanente, de este total 243.298 viven en el área urbana y 99.631 en el área rural (Instituto Nacional de Estadística, 2016). El tipo de dificultad permanente según los datos del INE, es la dificultad visual con incidencia del 47,2%, la dificultad de caminar con 17,1%, la dificultad de oír tiene una incidencia del 14,9%, la dificultad de hablar, comunicarse o conversar 9,4%; recordar o concentrarse 7,4% y sin especificar 3,9%.

Según información oficial, se cuenta con 2.803.982 viviendas particulares, 287.667 viviendas que albergan a personas con alguna dificultad permanente. Los departamentos que registran mayor porcentaje de personas con estas características son: La Paz 31,7%, Santa Cruz 23,5%, Cochabamba 15,9% y Potosí con 7,5% (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

La Ley General para personas con discapacidad del 2 de marzo de 2012, tiene el objeto de garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral, en el Art. 15 se refiere a que el Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad, asimismo se tomará las medidas necesarias estableciendo un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda social.

La Agencia Estatal de Vivienda en sus programas ha incluido la otorgación de viviendas a las personas con discapacidad, en el año 2018 ha atendido a 918 soluciones habitacionales siendo el departamento de La Paz el departamento con mayor atención a este grupo vulnerable. (Agencia Estatal de Vivienda, 2018).

El informe “Discriminación y Violencia Contra las Personas por Motivos de Orientación Sexual e Identidad De Género” (A/HRC/29/23)” realizó una encuesta a este grupo poblacional referida a si ¿Alguna vez fuiste desalojado de tu vivienda por tu orientación sexual o identidad de género?, el 30% de los encuestados afirma que fueron desalojados por causa de su orientación sexual e identidad de género. Ante esta situación se recomendó al Gobierno Boliviano que es necesario incluir políticas públicas de vivienda que prohíban actos de discriminación a LGBTI inquilinos o anticresistas, además de que puedan acceder como solicitantes a los beneficios de créditos para vivienda, como por ejemplo el crédito de vivienda de interés social sin discriminación por su orientación sexual, identidad de género o intersexualidad de la persona, en el marco del cumplimiento de la Ley Nº393 De Servicios Financieros, Decretos Supremos Nº 1842 y Nº 2137.

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en un proceso de diseño de políticas integrales como es la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) y la Política de Vivienda (PNV), ambas propuestas de políticas pretenden mejorar y potenciar toda la normativa existente y evitar que las mismas sean aplicadas a plenitud y de esta manera poder disminuir los niveles de discriminación en el acceso a una vivienda adecuada.

8. La discriminación en la vivienda puede afectar a varias dimensiones del derecho a una vivienda adecuada y a otros derechos humanos. ¿Podría dar más detalles sobre las áreas específicas en las que se experimenta discriminación en relación a la vivienda? A continuación, se presentan ejemplos de diversas formas de discriminación que pueden experimentarse en relación a las diferentes dimensiones del derecho a una vivienda adecuada:

*Accesibilidad*

- Discriminación en relación con el acceso a la tierra, incluyendo el acceso al agua y los recursos naturales esenciales para la habitabilidad;

- Discriminación en relación con el alquiler de vivienda o con su adquisición o en el acceso a la vivienda pública o social;

- el acceso a una vivienda de emergencia y/o de transición después de una catástrofe, un desplazamiento relacionado con un conflicto, o en caso de falta de hogar o violencia intrafamiliar

- la accesibilidad a la vivienda para las personas con discapacidad o las personas mayores, incluido el acceso a vivienda para la vida independiente o a las residencias de ancianos;

- la recopilación de datos o la exigencia de presentar determinadas certificaciones que den lugar a la exclusión de determinadas personas al acceso a la vivienda;

*Habitabilidad*

- discriminación en relación con las condiciones de la vivienda, como el hacinamiento o el mantenimiento de la misma

- La exposición a riesgos para la salud dentro de la vivienda, como es la falta de ventilación, calefacción o aislamiento, la exposición al fuego o al riesgo a deslizamientos, el uso de materiales de construcción insalubres u otros tipos de vivienda insalubre contemplada en las Directrices de la OMS sobre vivienda y salud;

- La exposición a otros riesgos que hacen que la vivienda sea inhabitable, incluida la violencia sexual o de género, la interferencia con la privacidad y la inseguridad física en el hogar y el vecindario;

- Discriminación en relación con permisos para la renovación de la vivienda o la ampliación de la misma;

*Asequibilidad*

- Discriminación en relación con el acceso a beneficios públicos relacionadas con la vivienda;

- Falta de igualdad en acceso a la vivienda asequible/social;

- Discriminación en la financiación pública y privada de la vivienda;

- Discriminación relacionada con los costes de la vivienda y servicios, las tasas relacionadas con la vivienda, los litigios o los impuestos;

*Seguridad de la tenencia*

- discriminación en relación con la propiedad o la herencia de la vivienda y la tierra y los recursos naturales conexos, incluida el agua, incluso sobre la base de una distinción entre acuerdos de tenencia formales e informales

- discriminación en relación con los desalojos, el reasentamiento y la compensación por la pérdida o el daño de la vivienda, la tierra o los medios de subsistencia

- trato diferenciado en el registro de tierras o títulos de propiedad, permiso de construcción de viviendas;

*Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura*

- discriminación en relación con el acceso al trabajo, la escolarización, la atención sanitaria o las prestaciones públicas basada en la dirección residencial o relacionada con la falta de una dirección oficial

- servicios de transporte público y costes de transporte;

- inequidades en el suministro de agua, saneamiento, energía, recogida de residuos y otros servicios públicos; su calidad o coste, incluidas las interrupciones/cortes de suministro, así como las políticas relativas a la desconexión de los servicios públicos

- disparidades espaciales en el acceso a la atención sanitaria, la educación, la atención infantil y las instalaciones culturales y recreativas;

*Ubicación*

- discriminación en relación con la libertad de elección del lugar de residencia dentro del país, dentro de una región o localidad especifico

- Discriminación basada en el lugar de residencia o la dirección, como puede ser la exclusión de oportunidades de trabajo o al acceso al crédito;

- la exposición a riesgos medioambientales para la salud, como la calidad del aire exterior, las inundaciones, la exposición a sustancias tóxicas en el suelo; el ruido; el riesgo de deslave, etc;

- la calidad de vida y la seguridad física en el barrio, incluyendo el impacto de disparidades en relación al comportamiento de la policía y la aplicación de la ley;

*Adecuación cultural*

- Discriminación en relación con el reconocimiento de espacios culturalmente adecuados como vivienda, así como el acceso equitativo al espacio público;

- prohibiciones en acceder, mantener o construir viviendas culturalmente adecuadas

- falta de reconocimiento de las formas móviles de residencia.

Los grupos desfavorecidos como los pueblos indígenas, indígenas urbanos, jóvenes, mujeres, niños, adultos mayores, o discapacitados no son debidamente identificados y visibilizados, por lo que han carecido de atención prioritaria y oportuna con soluciones de vivienda adecuada de acuerdo a sus necesidades específicas, lo que acentúa sus condiciones de vulnerabilidad.

El último censo nacional de población, que se realizó en 2012, estableció una población de 10.389.913 habitantes, de los cuales, 50,07% eran mujeres y 49,93% varones (INE, 2012).

Desde ONU-Habitat se está desarrollando la propuesta de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) y en el proceso de construcción de la política se pudo construir una serie de información relacionada al acceso a la vivienda, esta información es básicamente de áreas urbanas de los 9 departamentos, y será la base para poder respaldar las respuestas al presente cuestionario:

Fuente: ONU-Habitat

Fuente: ONU-Habitat

Fuente: ONU-Habitat

Bolivia presenta una heterogeneidad de soluciones habitacionales, dichas soluciones están vinculadas a la disponibilidad de recursos económicos y modalidad de tenencia de la propiedad, por tanto, es probable que las condiciones adecuadas de habitabilidad sean mayores en tanto la vivienda sea propia, o sean deficitarias cuando la ocupación temporal (en alquiler, anticrético o cedida) no permite decidir sobre mejoras en la vivienda que podrían generar mayor confort y comodidad a sus habitantes, incrementando el déficit cualitativo. Asimismo, existen diferencias entre el área urbana y rural, así en el área rural las condiciones de habitabilidad son más precarias, aun cuando la tenencia sea propia. De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, el 80,2% de los bolivianos habita en una casa, choza o pahuichi, el 15,5% vive en habitaciones sueltas y 4,1% en departamentos. De acuerdo a PNUD (2015), tres de cada diez hogares en el área metropolitana están en condición de hacinamiento, considerando éste como la existencia de más de dos personas por dormitorio, por tanto, presentan un nivel de calidad habitacional bajo. Este factor está relacionado con el nivel de ingresos familiar, así el hacinamiento en los hogares de bajos ingresos muestra un 50%, contrastante con el 1% identificado entre los hogares con ingresos mayores.

Para la Agencia Estatal de Vivienda Agencia una limitante para lograr mejores condiciones de habitabilidad es la presupuestal, y si bien se ha paliado esta insuficiencia con los procesos de autoconstrucción, donde el aporte de mano de obra disminuye los costos y se incrementa el número de intervenciones, existe el problema latente de la calidad de los acabados. Por tanto, como lección aprendida identifican la necesidad de incrementar presupuesto, lo que significa reducir el número en la meta de cantidad de unidades construidas. El proceso de autoconstrucción asistida permitió que se optimice los recursos económicos y se amplíe la cantidad de soluciones habitacionales, pero al ser un proceso de autoconstrucción en algunos casos se evidenció que familias con un alto nivel de vulnerabilidad no son aptos para optar a este apoyo gubernamental, por lo cual, se hace necesario complementar y mejorar el proceso de autoconstrucción asistida para atender dicha población. A partir del 2017 se incluyen consideraciones para adulto mayor y personas con discapacidad, generándose el modelo de la “vivienda inclusiva”, hay una tipología aplicada en los municipios de La Guardia y Buena Vista (espacios de giro para sillas de rueda, texturas a nivel de pisos). En el caso de personas con discapacidad se trabaja en forma conjunta con la Unión Europea . En estas intervenciones los costos son diferenciados en consideración de los kits de seguridad (ejemplo autismo: colores, no hay montos adicionales), o barandas (que son muy caras), texturas pisos, pero su alcance de acción es aún limitado debido a falta de mayores recursos económicos.

Fuente: ONU-Habitat

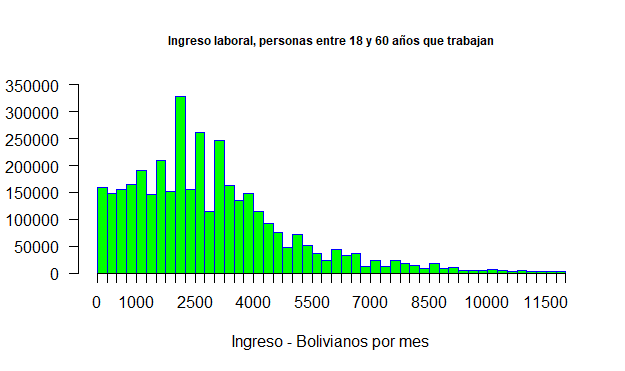
El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo adicionalmente ha elaborado 7 Guías de Construcción en coordinación con diferentes instituciones: a) “Aparatos de elevación – Requisitos Generales para el Mantenimiento de Ascensores” emitida el 19 de marzo de 2014, b) “Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Medio Físico” del 20 de marzo de 2014, c) “Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones” 17 de julio de 2014 d) **“**Guía de Fiscalización de Obras “ del 31 de marzo de 2016, f) “Guía de Supervisión de Obras” del 13 de abril de 2016, g) “Guía de Mantenimiento de Edificaciones” también del 13 de abril de 2016, h) “Guía Boliviana para el Diseño y Presentación de Proyectos” emitida en fecha 9 de febrero de 2017, i)“Guía Boliviana para Cosecha de Agua y el Uso Eco – Eficiente del Agua de Lluvia en la Vivienda” de 18 de diciembre de 2017, j) “Guía Boliviana para la Elaboración de Análisis de Precios Unitarios” aprobada el 1 de febrero de 2018. Asimismo se cuenta con un manual que guía la ampliación progresiva de la vivienda, aunque éste no ha sido formalmente aprobado. Estas guías que han sido elaboradas desde el VMVU en muchos casos pretenden mejorar las condiciones de habitabilidad para personas en situación de vulnerabilidad, dichas guías en muchos casos no son debidamente utilizadas.

Fuente: ONU-Habitat

Fuente: ONU-Habitat

La vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos para sus ocupantes. Los criterios de vivienda adecuada estiman que para que esto no ocurra, el costo de la vivienda con respecto a los ingresos tiene que estar por debajo del 30%. Los principales factores que inciden sobre el precio de la vivienda son los precios de los materiales de construcción, del suelo para vivienda, y de la mano de obra. La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), en sus estadísticas sociales, tiene un indicador de la población urbana ocupada en el sector informal, que en 2018 estaba estimada a 56.5%[[2]](#footnote-2). Si se toma un intervalo de estimación del mercado formal en el ámbito rural entre 5% y 10%, se concluye que más de dos tercios de la población ocupada a nivel nacional realiza su actividad económica en el sector informal. Esta cifra es consistente con otros estudios acerca del tamaño de la economía informal[[3]](#footnote-3), que estiman el tamaño de la producción de la economía informal a alrededor de 60% del producto interno bruto, lo que implica una proporción de empleo informal mayor al 60% dado que los empleos de la economía formal tienen generalmente una productividad más elevada.

El histograma aquí abajo ha sido elaborado con los ingresos laborales declarados a la Encuesta de Hogares 2017 y se observa que un poco más de 35% de la población, entre 18 y 60 años, que declaró trabajar en 2017 tenía un ingreso laboral menor a 2.000 bolivianos por mes[[4]](#footnote-4). En el histograma, se observa también una gran dispersión de los ingresos laborales, lo que se traduce en un alto índice de desigualdad en los ingresos personales dado que los ingresos no laborales presentan una dispersión mucho mayor[[5]](#footnote-5).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EH2017.

Según la Encuesta de Hogares 2017, la oferta total estimada para 2017 en Bolivia es de 3.347.098 viviendas, 2.231.776 en el área urbana y 1.115.322 en el área rural. Como se vio en los subtítulos de déficit y de tenencia, más de 100.000 de esas viviendas hacen parte del déficit cuantitativo por acumulación de 3 materiales malos y más de la mitad hace parte del déficit cualitativo[[6]](#footnote-6), habiendo, sin embargo, grandes diferencias entre en área urbana y rural - el porcentaje de viviendas con déficit siendo mucho mayor en el área rural. En lo que respecta a tenencia, la encuesta de hogares 2017 arroja los siguientes datos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La vivienda que ocupa el hogar es: | Total Bolivia | Urbano | Rural |
| ¿Propia y totalmente pagada? | 60.8% | 51.7% | 79.0% |
| ¿Propia y están pagando? | 3.0% | 3.7% | 1.8% |
| ¿Alquilada? | 14.6% | 20.5% | 2.7% |
| ¿En contrato Mixto (alquiler y anticrético)? | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| ¿En contrato anticrético? | 2.8% | 4.1% | 0.3% |
| ¿Cedida por servicios? | 3.6% | 2.7% | 5.3% |
| ¿Prestada por parientes o amigos? | 13.8% | 16.7% | 8.1% |
| ¿Otra? (Especifique) | 1.2% | 0.5% | 2.7% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EH2017.

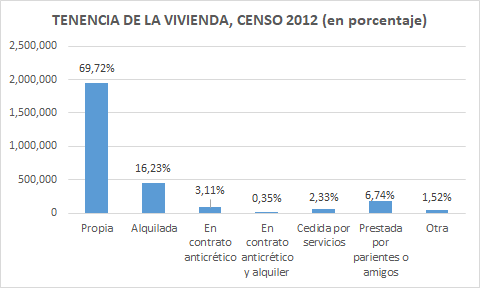
Casi el 30% de las viviendas no son de propiedad de sus habitantes, y supone que deben recurrir a otras formas de acceso a una vivienda, si bien a la fecha se han desarrollado desde el nivel central del estado algunas políticas para el acceso a créditos de vivienda, dichas oportunidades se ven frenadas debido a la gran complejidad del acceso a crédito de personas que trabajan en el sector informal, situación que debe ser analizada y mejorada.

La población que alquila su vivienda es más joven y más pobre que las que no viven en alquiler. Además, uno de cada cinco de estos hogares paga más del 30% su ingreso en alquiler, quedando fuera de los criterios de vivienda adecuada. La diversidad de realidades en Bolivia se refleja también en la tenencia de la vivienda. A la, arriba mencionada, gran diferencia de porcentaje de hogares que viven en alquiler entre el ámbito rural y urbano se agrega también diferencias regionales. Por ejemplo, en el ámbito urbano el porcentaje de hogares que alquila es de 20.5%, en La Paz, 16%, y en Santa Cruz, 24%. Si tomamos el 10% de hogares más ricos, el porcentaje nacional que vive en vivienda alquilada es de 22%, en La Paz, 13% y en Santa Cruz, cerca del 30%[[7]](#footnote-7).

De acuerdo con el Censo 2012, existen 3.158.691 viviendas en el país, de las cuales 3.134.613 corresponden a viviendas particulares y 24.078 a viviendas colectivas, resultado que muestra un incremento respecto al Censo 2001 de 887.960 viviendas particulares y 11.509 viviendas colectivas. El mayor incremento de viviendas particulares en el periodo 2001 a 2012 se presenta en los departamentos del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba; así, para el 2012 La Paz concentraba alrededor de 30% del total de viviendas particulares de Bolivia, seguido de los departamentos de Santa Cruz con 22% y Cochabamba con 18%, evidenciándose el año 2019 un incremento significativo en Santa Cruz, en cuanto a cantidad de población y número de viviendas.

En Bolivia existen diversas modalidades de tenencia: la vivienda propia, en alquiler, en anticrético (modalidad muy propia de Bolivia[[8]](#footnote-8), el arrendamiento mixto (anticrético y alquiler)[[9]](#footnote-9), la vivienda prestada por amigos o familia, y otras formas de tenencia.

A nivel nacional existe un alto porcentaje de vivienda propia de acuerdo a datos del último censo nacional realizado el año 2012, mostrando a nivel nacional un 69,72% de vivienda propia, un alto porcentaje de viviendas en alquiler de 16,23% y un 6,74% de vivienda prestada por parientes o amigos, datos a los que se suman en menor cantidad la vivienda en contrato anticrético, la mixta, la cedida por servicios y otras.



Fuente: Elaboración propia en base datos INE 2012

A efectos de que proceda la regularización del Derecho Propietario en el marco de la Ley N° 247, se establece que para la habilitación de los procesos de regularización el municipio debe contar con la delimitación de su área urbana mediante norma municipal debidamente homologada por Resolución Suprema.

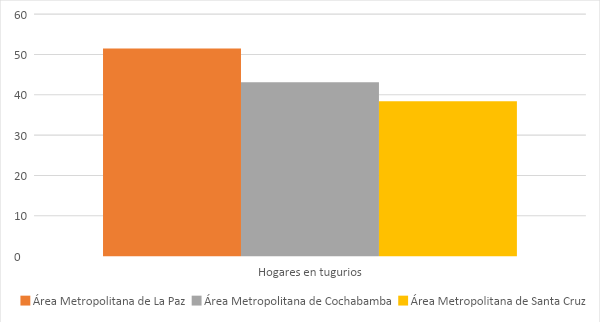
Algunos sectores de la población en Bolivia se ven imposibilitados de acceder a soluciones habitacionales a través del mercado formal o a través del Estado, en el primer caso debido a la ausencia de una oferta de suelo urbanizado adecuado y vivienda en términos de costo; y en el segundo porque no se incorpora el acceso a suelo en los programas de vivienda social. Si bien existe la compra de terreno como producto financiero específico a través de la banca, los mecanismos de financiamiento son insuficientes y las condiciones de financiamiento no coinciden con la realidad económica y la dinámica progresiva de la producción habitacional.

La población de ingresos medios bajos y bajos se ve obligada a acudir al mercado informal a riesgo de adquirir la tenencia precaria del suelo, o bien comprando un terreno cuya ubicación aleje a los habitantes de las oportunidades que brinda la ciudad. Aún mucho más inaccesible es el suelo urbano para la población que se encuentra en situación de extrema pobreza; de acuerdo a información del INE, a nivel nacional a diciembre del año 2018 se identificó que de cada 100 habitantes 15 personas viven en esta condición, es decir con un ingreso promedio de dos dólares diarios, de los cuales se registra un 33,4% en el área rural y el 7,2% en el área urbana.

Esta situación sin duda alguna es también consecuencia de la ausencia de política pública de regulación, gestión y acceso a suelo desde el nivel central del Estado, así como de los gobiernos departamentales y municipales en el marco de sus competencias asignadas en la Ley Marco Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”. Así, si bien los Gobiernos autónomos municipales tienen la atribución de administración y planificación del territorio, así como la formulación y aprobación de políticas municipales de financiamiento de la vivienda y la elaboración y ejecución de programas y proyectos de construcción, no existen avances en el cumplimiento de competencias exclusivas ni se han generado acciones concurrentes para el establecimiento de normativa pertinente para la gestión habitacional.

En este escenario de exclusión social, y ante falta de planificación urbana para la gestión de suelo para vivienda, muchas familias optan por la informalidad como única opción factible, avasallando, ocupando o comprando terrenos en áreas no autorizadas (áreas verdes y agrícolas) o en áreas de riesgo, adquiriendo terrenos sin ninguna seguridad jurídica de la tenencia que son traficados indiscriminadamente por fraccionadores o “loteadores”.

Un cálculo realizado por ONU-Habitat sobre la cantidad de hogares que viven en los asentamientos precarios en las ciudades de Bolivia (considerando la definición de asentamiento precario o tugurio de ONU-Habitat) nos muestra que el 51,5% de los habitantes en la Región Metropolitana de La Paz vive en un asentamiento precario, el 43,1% en la Región Metropolitana de Cochabamba y el 38,4% en la Región Metropolitana de Santa Cruz.



Fuente: Cálculos realizados por ONU-Habitat de acuerdo a definición de tugurio

Las manchas urbanas han ido creciendo en los últimos años, para ello, en cierta medida han contribuido los programas de vivienda social que se han planificado e implementado en las periferias, los asentamientos informales fruto de las migraciones, los proyectos realizados por urbanizadores privados, que eligen las periferias porque en esas zonas el suelo es de menor costo, la esperanza de las familias que viven en estos lugares es que “en algún momento lleguen” los servicios públicos. Estas periferias son mono-funcionales, dado que se han establecido solamente para vivienda, carecen de acceso a empleo, educación, salud, a espacios de recreación, es más las densidades son bajas, por tanto, la provisión de agua, alcantarillado, energía eléctrica se vuelve costoso para los gobiernos municipales y las entidades responsables y llevarán muchos años el lograr que esos barrios tengan esos servicios.

9. ¿Existen leyes, políticas o prácticas actuales en su país, región o ciudad/comunidad que contribuyan a o agraven la discriminación en relación al derecho a una vivienda adecuada?

Actualmente el país cuenta con una batería normativa con respecto al derecho a una vivienda adecuada. Dentro del proceso de mejora continua de la normativa de vivienda, se han ido modificando algunas existentes e incorporando nuevas normativas, se ha logrado desarrollar avances importantes en la búsqueda de la equidad e igualad en el acceso a una vivienda adecuada. Si bien base normativa es continuamente analizada, aun se pueden detectar ciertos vacíos que no contribuyen a la eliminación de la equidad en el acceso a una vivienda adecuada.

La actual configuración demográfica del país establece que el 67,3 % de la población se encuentra áreas urbanas y el 32,7% en las áreas rurales. Las proyecciones afirman que la tendencia a la urbanización continuará, lo cual implica desafíos para satisfacer la demanda de viviendas adecuadas y asequibles vinculadas a ciudades capaces de constituirse en inclusivas, resilientes, seguras, conectadas y que den las oportunidades sociales y económicas.

Bajo los convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado a través del establecimiento de los Derechos Fundamentales, recoge estos derechos y los plasmas como la máxima prioridad entre las funciones y los fines del Estado.

De esta manera, dentro del Capítulo II del Título II, Derechos Fundamentales, se desarrolla el siguiente Artículo, respecto al derecho a un hábitat y vivienda adecuada:

En esa línea precedente, el Parágrafo III del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, indica lo siguiente:

* Los numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo I del Artículo 82 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señalan que de acuerdo con la competencia del Numeral 36 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:
* La Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, modificada por la Ley N° 730 de 02 de septiembre de 2015, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, tiene como objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
* El Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley N° 492, modificada por la Ley N° 730, señala que los acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y éstos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las competencias, exclusivas, concurrentes y compartidas.
* El 12 de julio de 2006 mediante Decreto Supremo No. 28794 se crea el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con el objetivo de “Reducir el déficit habitacional y contribuir en la erradicación de la extrema pobreza” (Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013).

Los recursos del PVS provienen del aporte patronal público y privado del 2% para vivienda social, colocados en un fideicomiso administrado por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y apoyo a la Productividad, FONDESIF, como fiduciario.

* Ante los aspectos señalados, mediante Decreto Supremo No. 0986 del 21 de septiembre de 2011, se crea la Agencia Estatal de Vivienda como entidad responsable de la dotación de soluciones habitacionales a la población del Estado Plurinacional de Bolivia y generar las condiciones para el cierre del Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS.
* A través de la Ley N° 959 de 19 de junio de 2017, da la posibilidad a las entidades territoriales autónomas poder transferir terrenos de su propiedad, a título gratuito y/o recursos económicos, como contraparte, a favor de la Agencia Estatal de Vivienda, para la implementación de programas y proyectos de vivienda social en el marco del Régimen de Vivienda Social, de acuerdo con la competencia concurrente determinada en la Constitución Política del Estado.
* Los Convenios Intergubernativos que se suscriben entre la Agencia Estatal de Vivienda y los Gobiernos Autónomos Municipales son instrumentos formales suscritos por Autoridad competente que cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, modificada por la Ley N° 730 de 02 de septiembre de 2015, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, surten efectos jurídicos y son de cumplimiento obligatorio entre las partes.
* La regularización del derecho propietario destinado a vivienda ameritó un marco legal especial el 2012, cuando ante la necesidad imperiosa de aclarar vacíos legales y establecer un nuevo plazo de posesión, se pone en vigencia Ley N° 247 de 5 de junio de 2012, modificada posteriormente por Ley N° 803, de fecha 9 de mayo de 2016, la misma que establece una forma de adquirir la propiedad por efecto de la posesión en la vía judicial con un proceso especial y estableciendo una temporalidad a la posesión que se acoja a esta forma de regularización, pero asimismo estableciendo el marco legal de las enajenaciones de bienes inmuebles de entidades públicas que hayan sido destinados a vivienda y finalmente llevando a la vía administrativa de correcciones técnicas y legales que permitan la consolidación del derecho propietario.
* El año 2013, en lo referente al marco normativo del sector, se emite una importante, la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, Ley de servicios financieros que define a la vivienda de interés social como aquella única vivienda sin fines comerciales cuyo valor comercial o costo final de construcción (incluido el terreno) no supere UFV400.000 si es un departamento o UFV460.000 si es una casa, estableciendo por primera vez en nuestro país una tasa regulada a créditos de vivienda, en función al valor de la vivienda, con el objetivo de ampliar la cobertura de prestatarios que pretendan adquirir su primera vivienda, apoyando además con la constitución de un Fondo de Garantía FOGAVIS para paliar el aporte propio requerido.
* Ese mismo año, 2013, entra en vigencia una importante Ley que procura frenar la proliferación descontrolada de habitabilidad urbana, la Ley contra avasallamiento y tráfico de tierras, Ley N° 477 de 30 de diciembre de 2013, que establece el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras, además de crear nuevos tipos penales referidos al avasallamiento y tráfico de tierras.

Toda la normativa que se generó durante las ultimas gestiones gubernamentales buscan reducir y eliminar la discriminación en el acceso a una vivienda adecuada, las propuestas de las políticas de ciudades y vivienda buscan reforzar esta normativa y articularlas de manera efectiva y que puedan cumplirse de manera efectiva.

10. ¿Existen exenciones previstas en normativa o política nacional que permiten a (ciertos) proveedores de vivienda públicos, privados o religiosos dar un acceso exclusivo o preferido a la vivienda a miembros de un grupo determinado? Por ejemplo, en función de alguna afiliación, el contrato de trabajo, el servicio público, la edad, la discapacidad, el estado civil, el sexo, el género, la religión, los ingresos u otros criterios.

La Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad UE-FNSE, es una Institución desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, fue creada mediante Decreto Supremo N°839 el 6 de abril de 2011, con el objetivo de ejecutar e implementar Programas y Proyectos en beneficio de las Personas con Discapacidad.

La Ley 3925 de 21 de agosto de 2008, elimina el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en los años electorales y no electorales y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), financiado con un aporte anual de Bs. 40.000.000 (Cuarenta 00/100 millones de Bolivianos) con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación. El D.S. Nº 445 de fecha 10 de marzo de 2010, reglamenta la Ley 3925, designando al Ministerio de Justicia como instancia responsable de coordinar y aprobar el uso de los recursos, así como efectuar el seguimiento de los diferentes Programas y Proyectos. Debido a la falta de ejecución de proyectos, con D.S. 0839 del 6 de abril de 2011, se crea la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad a cargo del Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de implementar y ejecutar Programas y Proyectos en beneficio de las Personas con Discapacidad del Estado Plurinacional de Bolivia. La Ley Nº 223 para Personas con Discapacidad establece el pago de una renta anual de Bs. 1.000.- (Un mil 00/100 Bolivianos) para personas con discapacidad grave y muy grave, recursos que son transferidos por el FNSE al Ministerio de Salud, quién operativiza el pago. El presupuesto anual establecido para el pago de la renta es de Bs. 20.000.000.- (Veinte millones 00/100 Bolivianos).

Las funciones de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad son:

* Contribuir en la definición y revisión de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
* Ejecutar e implementar programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
* Sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
* Sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
* Establecer mecanismos de coordinación con las entidades publicas y privadas cuya responsabilidad es la atención a las personas con discapacidad para la definición, ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos del FNSE.
* Supervisar, controlar y monitorear programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
* Implementar mecanismos de acción que permitan transparentar la información ante la sociedad y de manera específica ante las organizaciones de personas con discapacidad sobre la ejecución técnica y presupuestaria de los programas y proyectos del FNSE.
* Ejecutar otras funciones inherentes que le sean asignadas por el Ministerio de la Presidencia en el marco de sus competencias específicas que no generen duplicidades ni costos adicionales.

11. En caso de que pueda haber un trato diferenciado hacia determinados grupos en relación con la vivienda, por favor explique por qué dicho trato podría ser justificable de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, por ejemplo, medidas positivas, que beneficien a un grupo específico para superar una discriminación o desventaja sistemática o que qué dicho trato equivaldría a una discriminación.

Una de las acciones puntuales que se han desarrollado desde el Gobierno central para que personas con discapacidad puedan acceder a una vivienda adecuada es la creación de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, que busca lo siguiente:

Dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante las políticas públicas desarrolladas por el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, dependiente del Ministerio de la Presidencia, garantizando así la atención integral, la prevención de la discapacidad y la inclusión participativa y protagónica de este sector y sus familiares en la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Se establecieron tres pilares de la UE-FNSE que responden a normas internacionales en la búsqueda de mejorar el derecho al acceso a una vivienda adecuada:

1. Generación de Ingresos. Implementar emprendimientos productivos que permitan la inclusión de las personas con discapacidad en la matriz productiva del Estado Plurinacional e incrementar las probabilidades de inserción laboral en empleo y autoempleo para mujeres y hombres con discapacidad.
2. Oportunidades. Desarrollar acciones, programas y proyectos de facilitación del acceso a la salud en sus componentes de promoción, prevención, atención y rehabilitación biopsicosocial, asistencia legal y social, fortalecimiento de organizaciones sociales, así como educación, de las personas con discapacidad.
3. Habitabilidad. Mejorar la calidad de vida a través de la generación de proyectos de desarrollo habitacional que posibiliten el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad favorables, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y las prioridades definidas para las personas con discapacidad.

**SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL Y RESIDENCIAL**

12. ¿Qué formas de segregación socio-espacial basado en la raza, la casta, la etnia, la religión, la nacionalidad, la situación migratoria, el patrimonio, la situación económica/los ingresos u otros motivos sociales se observan en los contextos urbanos y/o urbano-rurales de su país?

Definimos la segregación residencial como “…el proceso mediante la cual los grupos sociales de mayor poder restringen, condicionan o limitan –a través de distintos mecanismos, y de manera no siempre consciente e intencional- las oportunidades de acceso al suelo urbano a los grupos de menor poder, resultando en su distribución desigual u otras formas de separación en el espacio físico de la ciudad”

En el contexto urbano en Bolivia, uno de los paises de América Latina con mayor porcentaje de población indígena, es posible que la segregación residencial en areas urbanas esté relacionada con factores étnicos, pero aún no tenemos suficiente evidencia sobre el tema (aspecto que amplia en la siguiente sección).

Con los datos disponibles, podemos afirmar que en el area urbana en Bolivia existe una macada segregación residencial por motivos económicos. Esto ha sido medido por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas calculada por el Instituto Nacional de Estadística con base en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012 que es una método multidimensional de medir la pobreza y útil para construir mapas de pobreza que dan cuenta de la seregación socioespacial. Este método mide esas necesidades básicas. El grado en que estas necesidades están insatisfechas se considera un indicador de privación o malas condiciones de vida (como cantidad y calidad insuficientes de los servicios de vivienda, falta de bienes duraderos y educación insuficiente).

13. ¿Qué impacto tienen estas formas de segregación socio-espacial y residencial en las comunidades afectadas? Señale indicadores como las tasas de pobreza, desempleo y subempleo; las tasas de prevalencia de la malnutrición; las disparidades en el acceso a los servicios e instalaciones (como el acceso a la escolarización, la atención sanitaria u otras prestaciones públicas); las disparidades en el acceso a las infraestructuras (falta y/o mala calidad del suministro de agua, saneamiento, transporte, energía, recogida de residuos y otros servicios públicos); las tasas de exposición a los riesgos ambientales para la salud (mala calidad del aire, inundaciones, exposición a sustancias tóxicas en el suelo, etc.).

El método de medición de la pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas mide varias carencias:

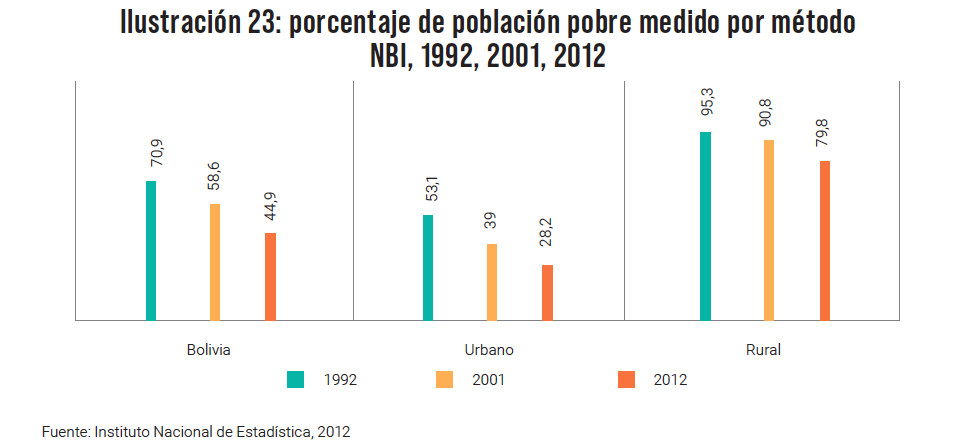
• Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar.

• Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado.

• Acceso a educación básica.

• Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo.

Esta medición ha arrojado los siguientes datos generales para Bolivia, por área urbana y rural



Si bien es cierto que las ciudades tienen menos pobreza comparada con el área rural, en términos absolutos afecta a una mayor cantidad de personas dado que la mayoría de la población boliviana habita en áreas urbanas (67%). Las aglomeraciones metropolitanas más importantes del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) albergan al 47% de la población total del país. Un 25% de ellos están clasificados como pobres. Las carencias que más impacta en la vida de sus habitantes están relacionadas con la vivienda: i) Insuficientes espacios para vivir y ii) Carencias en agua potable y alcantarillado. Pero también sufren de carencias educativas y de salud.

Componentes Personas con Necesidad

En términos espaciales nuestras ciudades muestran un patrón de segregación existe una alta concentración de hogares con carencias en las zonas de expansión de baja densidad como muestra el siguiente mapa del área metropolitana de Cochabamba.

*Ilustración 1 Mapa de concentración de pobreza por NBI Área Metropolitana de Cochabamba*



14. ¿Ha habido leyes, políticas o prácticas en la historia reciente a actual de su país, región o ciudad/comunidad que hayan causado o exacerbado la segregación residencial?

No creemos que esto aplique para Bolivia.

15. En su opinión, ¿qué factores (actuales o históricos) son los principales impulsores de la segregación socio-espacial y residencial en contextos urbanos y urbano-rurales en su país?

Principales impulsores de la segregación socio-espacial y residencial en contextos urbanos.

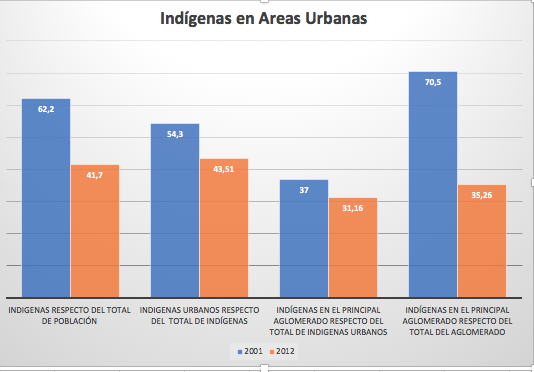
En las últimas décadas Bolivia ha vivido en proceso acelerado de urbanización en términos espaciales consolidó una configuración urbana cuya característica principal es la existencia de un núcleo urbano consolidado rodeado de un cinturón de territorio de expansión de baja densidad, que es donde se concentran las familias que están clasificados como pobres.

Se trata de una ocupación desordenada, no planificada, sin seguridad jurídica, con exposición elevada a riesgos en zonas no adecuadas para construcción de viviendas o en zonas ambientalmente sensibles y con carencias en el acceso a servicios básicos.

16. Existen en su país casos en los que la agrupación socio-espacial y residencial ha sido resultado de una elección voluntaria de residencia por parte de los miembros de determinados grupos o?

En áreas urbanas:

Bolivia es un país de rápida urbanización, alimentada por migración rural. Por otro lado, una de las características del país es que tiene una importante población indígena y muchos de ellos hoy por hoy habitan áreas urbanas como mostramos en el siguiente gráfico:



Fuente: ONU-Habitat con base en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

En contextos urbanos, muchos pueblos indígenas adoptan la estrategia de vivir juntos en ciertos sectores o barrios de la ciudad como resultado de las redes de apoyo y parentesco que forman. Existen numerosos trabajos de investigación al respecto como: De “Ch’usa Marka a Jach’a Marka” un trabajo sobre la composición de los barrios de la ciudad de El Alto, que muestra que muchos de los barrios recrean correponden a “ayllus” (comunidades en aymara) del altiplano boliviano. Similar situación ocurre en la ciudad de Santa Cruz donde hay barrios de Mojeños, Guaranís y Chiquitanos ( pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia).

17. La preservación de la identidad cultural, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y la protección de otros derechos de las minorías son ejemplos de motivos por los que los grupos pueden elegir vivir separados. ¿Puede comentar cómo se evidencian estas formas de separación socio-espacial/territorial en su país, si estas comunidades son objeto de discriminación y sufren consecuencias adversas de la segregación espacial (por ejemplo, a través de disparidades en el acceso a servicios, infraestructuras, condiciones de vida, etc.)?

Como se mencionó, en el área urbana de Bolivia se ha probado que existe segregación socio-espacial relacionada al factor económico, pero un trabajo del Banco Mundial[[10]](#footnote-10) sobre la situación de pueblos indígenas que habitan áreas urbanas muestra que el factor étnico también puede jugar un rol.

Ese trabajo señala que, si bien los indígenas que habitan áreas urbanas están en mejores condiciones que sus pares en áreas rurales en términos materiales, en América Latina 36% de los indígenas urbanos viven en barrios pobres o ligados a la ciudad informalidad

“Por esto, si bien es cierto que los indígenas urbanos tienen mejores oportunidades de acceso a servicios públicos que sus pares rurales, también lo es que continúan rezagados respecto a otros residentes urbanos, no indígenas, y se exponen a nuevas dimensiones de exclusión. En base a una definición simplificada de barrio pobre, determinada por la ausencia de por lo menos un servicio público básico (agua, electricidad o alcantarillado) o la presencia de pisos de tierra, como indicador de una construcción de mala calidad, los censos regionales indican que en la mayoría de los países el porcentaje de indígenas que viven en barrios pobres es mucho más alto—con frecuencia el doble o más—que el porcentaje de no indígenas” (Banco Mundial, 2015:p 41- 42)

Ese mismo estudio señala que en Bolivia el 90% de los indígenas tienen vivienda propia, pero en areas urbanas esta cifra se reduce a tan solo el 61%. Por otra parte, en zonas urbanas los servicios públicos suelen tener un costo más elevado lo que impacta en mayor medida a los pueblos indígenas.

18. En su opinión, ¿Estas formas de separación/agrupación voluntaria observadas son compatibles con la legislación sobre los derechos humanos? (por ejemplo, para proteger los derechos de las minorías o para respetar la libertad de elección de los individuos para decidir con quién vivir juntos).

En los casos mencionados, si.

19. ¿Existen leyes o políticas que requieren que determinadas personas (y sus familias) residen en una vivienda que se les haya proporcionado o en una zona geográfica determinada (por ejemplo, solicitantes de asilo, migrantes, desplazados internos, refugiados, minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o de otro tipo, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personal de los servicios públicos y militares)?

No existen en Bolivia

20. En su opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos para disminuir la segregación socio-espacial, incluida la residencial?

El principal obstáculo es que el tema a pesar de estar contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social como un pilar de disminución de la pobreza, no tiene indicadores territorializados para evaluar el progreso e impacto de las políticas.

Los municipios solo cuentan con la información censal cada 10 años y no producen sus propios mecanismos de seguimiento ni datos entre un censo y otro.

**MEDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA FRENAR LA DISCRIMINACIÓN Y REDUCIR LA SEGREGACIÓN**

21. ¿Qué leyes, políticas o medidas existen a nivel nacional o local para prevenir o prohibir la discriminación en relación al derecho a una vivienda adecuada?

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el apoyo de ONU-Habitat, ha elaborado desde el 2018 la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades – PNDIC,la cual a la fecha está siendo gestionada para su aprobación, esta Política plantea un abordaje sistémico en su propuesta a través de seis objetivos, entre los cuales se encuentra el de “Ciudades Inclusivas”, que propone mejorar la equidad e inclusión en el acceso a oportunidades y recursos urbanos, promoviendo las identidades.

Entre sus líneas estratégicas (LE) y líneas de acción (LA) plantea lo siguiente:

(LE) Disminuir las brechas de género y generacionales.

(LA) Incrementar la oferta pública de calidad, servicios e infraestructura para el trabajo de cuidado considerando como prioridades los grupos poblacionales vulnerables.

(LA) Incrementar los servicios sociales de prevención, protección y atención a mujeres y diversidades sexuales, para la eliminación de las distintas formas de violencia en razón de género.

(LA) Incorporar en la inversión urbana la diferenciación de las necesidades por razón de género, diversidades sexuales y por razón de edad en el acceso y uso del espacio público, las infraestructuras y los equipamientos.

(LA) Atender las necesidades particulares y diferenciadas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

(LE) Reducir la desigualdad y la segregación socioespaciales incrementando el acceso a oportunidades y recursos.

(LA) Reducir integralmente y evitar la reproducción de los déficits que marcan desigualdades socioespaciales.

(LA) Articular las políticas de acceso al suelo y vivienda para disminuir la desigualdad socioespacial y fomentar la diversidad

(LA) Incrementar la protección social como medio para reducir la desigualdad socioespacial.

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ha iniciado en la gestión 2019, la elaboración de la Política Nacional de Vivienda-PNV, logrando al 2020 un primer documento borrador, el cual a la fecha está siendo complementado y ajustado para su posterior aprobación. La PNV se basa en el concepto de la vivienda adecuada, donde uno de sus elementos es la accesibilidad, por lo cual la Política Nacional de Vivienda considera las necesidades de grupos desfavorecidos o marginados, a través del planteamiento de líneas estratégicas y líneas de acción que atiendan las necesidades de acceso a una vivienda adecuada de la población vulnerable.

La Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, es una institución pública descentralizada y dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, especializada en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales concurrentes que construyen a la equidad social y calidad de vida.

En ese entendido, todos los programas de la AEVIVIENDA están dirigidos a sectores vulnerables de la población boliviana, pero además existe el programa específico de vivienda extraordinaria, el cual ejecuta proyectos de vivienda orientados a familias altamente vulnerables y que por sus características especiales no pueden ser atendidos con el resto delos programas de Vivienda Social. Dentro de los criterios para su priorización se encuentran el número de miembros de la familia, los miembros con discapacidad en la familia, madres o padres solteros, carga familias (padres, abuelos u otros).

Dentro de las políticas operacionales para poblaciones vulnerables la AEVIVIENDA plantea:

1. Política de acceso a una vivienda social para personas con discapacidad

Todas las personas que cuentan con un registro de carnetización en el Sistema de Registro para Discapacitados, o familias que tengan personas con discapacidad a su cargo, serán sujetos de atención, en un 4% del total de las intervenciones anuales de la AEVIENDA, bajo las modalidades de subsidio o crédito y los parámetros establecidos en los programas de Vivienda Nueva, PMAR y Comunidades Urbanas. Para el acceso a estos Programas de Vivienda Social se consideran prioritariamente el grado y tipo de discapacidad (grave o muy grave), nivel de ingreso familiar, cargas sociales de la familia, educación y localización territorial (urbano/rural); aspectos que serán ponderados en la evaluación social.

1. Política de acceso a una vivienda social para personas adulto-mayores.

La AEVIVIENDA posibilitará el acceso a una vivienda social para una vejez digna, en el marco de su principio de equidad y oportunidad a personas adultos mayores solas o en pareja, sin dependientes a su cargo, sean independientes en movilidad y alimentación, que tengan condiciones económicas precarias y no tengan vivienda propia.

1. Propuesta de política de acceso a una vivienda social para mujeres madres solas.

Las mujeres solas, jefas de hogar, que tengan dos o más hijos a su cargo, que vivan en condición de vulnerabilidad y no sean propietarios de una vivienda serán beneficiadas con una vivienda adecuada y segura, con acceso a servicios sociales para la educación y cuidado de los hijos, recreación y equipamiento, lo cual permita un desarrollo personal de la madre y sus dependientes.

22. ¿Ha adoptado su Gobierno estatal, regional o local alguna medida positiva, como medidas de acción afirmativa, para reducir la discriminación, la segregación o la desigualdad estructural en relación con la vivienda? ¿En qué medida han tenido éxito estas iniciativas para abordar la discriminación y la segregación en relación a la vivienda?

Se cuenta con el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que tiene como misión el dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante las políticas públicas desarrolladas por el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, dependiente del Ministerio de la Presidencia, garantizando así la atención integral, la prevención de la discapacidad y la inclusión participativa y protagónica de este sector y sus familiares en la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Quienes para el caso de vivienda, contribuyen con una contraparte del 20% a la Agencia Estatal de Vivienda, para la atención a las personas con discapacidad.

23. ¿Se han aplicado leyes, políticas o medidas concretas para limitar o reducir la segregación residencial y socio-espacial en relación a la vivienda? ¿En qué medida estas políticas han planteado problemas de derechos humanos?

Desde la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades - PNDIC, se plantea como objetivo: “Ciudades saludables y con calidad de vida” que propone incrementar la calidad de vida con el acceso equitativo a servicios, movilidad, equipamientos, salud y espacios públicos adecuados y seguros, la cual ha iniciado una articulación intersectorial para la coordinación y gestiones para su aprobación y aplicación, si bien es una Política planteada para la escala urbana, sus lineamientos permitirán el desarrollo de instrumentos específicos a nivel local (Gobiernos autónomos municipales) para la reducción de la segregación socioespacial de las viviendas.

Entre sus líneas estratégicas (LE) y líneas de acción (LA) plantea lo siguiente:

(LE) Facilitar el acceso equitativo a servicios urbanos de calidad.

(LA) Ampliar y equilibrar la cobertura y el acceso equitativo a servicios urbanos de calidad priorizando e impulsando el saneamiento urbano, tecnologías limpias y la reducción de la contaminación ambiental y acústica.

(LE) Promover la movilidad urbana eficiente y sustentable con enfoque de inclusión social y de género.

(LA) Optimizar la transitabilidad, sustentabilidad y seguridad en las ciudades priorizando al peatón, promoviendo el transporte no motorizado y el diseño urbano inclusivo y con enfoque de género.

(LE) Incrementar los equipamientos urbanos, con énfasis en la salud, y el espacio público.

(LA) Habilitar, ampliar y optimizar los equipamientos urbanos con enfoque de género y promover las centralidades como mecanismos de reducción de la desigualdad socioespacial.

(LA) Garantizar el acceso universal al espacio público.

El Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes inmuebles urbanos destinados a Vivienda- PROREVI, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene al objetivo de coadyuvar a la regularización del Derecho Propietario de las personas naturales que se encuentran en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio o área urbana.  Este programa cuenta con las siguientes funciones:

a) Difundir los objetivos, alcances y resultados del proceso de regularización.  
b) Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores involucrados en el proceso de regularización.  
c) Seguimiento a los procesos de regularización.  
d) Diseño, creación e implementación del Sistema Informático de Registro.  
e) Verificar la información a objeto de evitar la doble regularización.

A través de este programa se promueve que las familias asentadas, con posesión pública, continua, pacífica y de buena fe, antes del 31/12/2011 puedan regularizar el derecho propietario del bien inmueble dentro de un área urbana, y de esta manera puedan acceder a programas sociales de vivienda o a crédito bancario, para la mejora de sus condiciones actuales.

Desde la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, se planteado el Programa de Comunidades Urbanas, que es un programa de financiamiento para el diseño y ejecución de Proyectos integrales de Vivienda y Hábitat, que tiene como finalidad posibilitar la construcción de proyectos integrales de soluciones habitacionales unifamiliares o multifamiliares. Este programa exigía que en el entorno del proyecto se cuente con las condiciones urbanas adecuadas, pero no tuvo el impacto deseado, debido que los interesados en estas soluciones habitacionales debían acceder al programa a través de un crédito bancario y cumplir los requisitos que exige la banca, para convertirse en beneficiario.

24. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, así como de otras organizaciones no gubernamentales, de instituciones religiosas y gubernamentales, en el fomento de un clima que reduzca o exacerbe la discriminación en relación con la vivienda y la segregación?

No se ha logrado incidir en que los Medios de comunicación, para que tengan un papel en el fomento para la reducción de la discriminación en relación con la vivienda y la segregación.

Desde distintas organizaciones no gubernamentales- ONGs, se ha obtenido el apoyo al sector a través de proyectos para la construcción de viviendas para población vulnerable, donde se ha brindado apoyo social, técnico y legal a familias vulnerables, este trabajo fue realizado a través de las Cooperativas de Vivienda o de organizaciones sociales, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios.

25. ¿Qué mecanismos institucionales existen para denunciar, monitorear y avanzar reparaciones en casos de discriminación o segregación en relación con el derecho a una vivienda adecuada? ¿En qué medida han sido eficaces para hacer frente a la discriminación?

Dentro del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, no se cuenta con una instancia dedicada a la recepción de denuncias en casos de discriminación o segregación en relación con el derecho a una vivienda adecuada, pero sí el Ministerio de Justicia (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales) recibe distintos tipos de denuncias, a través de distintas instancias:

Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD)

Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS)

Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP)

No se cuenta con datos desagregados sobre los casos que se atienden relacionados a la discriminación o segregación en relación con el derecho a una vivienda adecuada, por lo cual un reto para el sector es el desarrollo de sistemas de registro y monitoreo de este tipo de casos denunciados.

26. En su opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos para acceder la justicia frente situaciones de discriminación y segregación en relación al derecho a una vivienda adecuada?

Los principales obstáculos son la inexistencia del marco normativo que sancione las prácticas de segregación en relación al derecho a una vivienda adecuada.

27. ¿Puede por favor indicar cómo individuos y grupos que han sido sujetos a discriminación o segregación pueden presentar quejas ante los organismos administrativos, no judiciales o judiciales para solicitar ayuda? Por favor, comparta información sobre cualquier caso/litigación importante a este respecto que haya sido tratado por las cortes, sistemas tribunales u otros organismos de su país.

Pueden acudir a las instancias dependientes del Ministerio de Justicia, antes señalados, se aclara además que el Ministerio de Justicia realiza procesos de conciliación de partes a través de procesos voluntarios, pero que no en todos los casos son resueltos.

**DATOS SOBRE DISCRIMINACIÓN EN LA VIVIENDA Y SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL/RESIDENCIAL**

28. ¿Se recopilan datos sobre disparidades, discriminación y segregación socio-espacial en relación al derecho a la vivienda adecuada? ¿Estos datos están a disposición del público? En caso afirmativo, ¿dónde se puede acceder a ellos? ¿Existe algún obstáculo práctico o legal para recopilar y difundir dicha información en su país?

SI, están disponibles a nivel de ciudades capitales, a través del Instituto Nacional de Estadística, y son de acceso público.

29. ¿Podría por favor compartir estudios o encuestas realizadas por el gobierno local, regional o nacional o por otras instituciones en su país que examine las disparidades, la discriminación y segregación socio-espacial en relación al derecho a la vivienda y como puede ser abordado? (por favor presentar el documento o incluir título y enlace)

La base de datos pública, de captura anual es la Encuesta de Hogares ( https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociales/vivienda-y-servicios-basicos/encuestas-de-hogares-vivienda/), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

30. ¿Puede por favor proporcionar información y estadísticas relacionadas con las denuncias con discriminación en relación al derecho a una vivienda adecuada? ¿cómo se han investigado y resuelto estos casos, y, que información se puede proporcionar sobre casos en que se ha logrado requerir que actores privados o públicos pongan fin a dicha discriminación (por ejemplo, casos donde se ha logrado imponer sanciones o multas por incumplimiento)?

La entidad encargada de recibir las denuncias es la Defensoría del Pueblo, sin embargo, sus reportes NO desagregan por tipo, presenta de manera general, según procedimiento (admitidos, gestionados, orientados); el último generado corresponde al 2017 https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/estadisticas-gestion-2017.pdf

1. Véase el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la correspondiente Observación General nº 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.udape.gob.bo/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Ver por ejemplo los estudios de (Medina & Schneider, 2018) y de (Velasco, 2016) [↑](#footnote-ref-3)
4. Por razones de visualización, hemos cortado el histograma a un ingreso de 12.000 bolivianos por mes porque después las barras se hacen muy pequeñas. El ingreso laboral máximo declarado fue de 33.300 bolivianos por mes. [↑](#footnote-ref-4)
5. El ingreso no laboral máximo declarado fue de 49.000 bolivianos por mes, mientras que la gran mayoría de la población declara tener un ingreso no laboral de 500 bolivianos o menos. [↑](#footnote-ref-5)
6. El déficit por saneamiento es, de lejos, el más grande y es el que determina que el déficit cualitativo sea tan grande. En los otros criterios del déficit, las cifras son mucho menores. [↑](#footnote-ref-6)
7. ONU-Habitat con datos de la EH2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. La vivienda en anticrético consiste en el establecimiento de un contrato entre el propietario y el anticresista, en el que se estipula un monto fijo por un tiempo de 2 años de ocupación de la vivienda, el primero obligatorio y el segundo opcional, al cabo de este tiempo, el propietario está obligado a devolver el monto recibido al inicio. Esta opción le permite al propietario, invertir el dinero en otra actividad que le permita obtener márgenes positivos a su favor. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se establece un monto menor al que corresponde solamente a anticrético, y una cuota mensual menor para el caso mixto. [↑](#footnote-ref-9)
10. Banco Mundial. 2015. Latinomérica Indígena en el Siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO. [↑](#footnote-ref-10)